

EL FINAL DEL KIRCHNERISMO

Los primeros meses del mandato de Cristina Fernández como presidenta de Argentina han hecho pedazos las expectativas previas de una suave transición conyugal desde su marido Néstor Kirchner. Después de su aplastante victoria en octubre de 2007, con el 45 por 100 de los votos frente al 23 por 100 de su rival más cercano, y de convertirse en la primera mujer elegida para el gobierno del país¹, mayoritariamente se consideraba que Fernández representaría la continuidad, sin cambios políticos evidentes. La realidad ha sido más turbulenta; el anuncio en marzo de 2008 del aumento de los gravámenes sobre las exportaciones agrícolas provocó cuatro meses de protestas que involucraron no solamente a grandes empresas del sector agrario y a pequeños y medianos agricultores, sino también a la clase media de varias ciudades importantes, que una vez más organizó *cacerolazos* como lo habían hecho durante la crisis de 2001-2002.

En medio de considerables protestas urbanas, como por ejemplo la manifestación de 200.000 personas en la ciudad de Rosario, y de bloqueos de carreteras encaminados a cortar las exportaciones de cereales, los índices de aprobación de la nueva presidenta se desplomaron desde el 56 por 100 en enero a apenas el 20 por 100 a mediados de año. En julio, el intento del gobierno de obtener la aprobación del Congreso a la subida de los impuestos fue dramáticamente derrotado en la Cámara alta: los 72 senadores se dividieron por igual y el voto decisivo contra el proyecto lo emitió el propio vicepresidente de Fernández, Julio Cobos. Esta deserción a un nivel tan elevado confirmó una cadena de ellas en la que la coalición gubernamental Frente para la Victoria empezó a fragmentarse, con mucha antelación a las próximas elecciones parlamentarias previstas para octubre de 2009.

La rápida escalada de las tensiones en el panorama nacional resulta más sorprendente dada la política esencialmente continuista entre Kirchner y

¹ La única mujer que previamente había encabezado la jefatura del Estado, María Estela Martínez de Perón, fue elegida vicepresidenta en 1973, en la candidatura de su marido Juan Perón; alcanzó la presidencia a la muerte de éste en 1974 y fue derrocada por un golpe militar dos años más tarde.

su mujer: por ejemplo, durante sus seis primeros meses la nueva presidenta no hizo prácticamente ningún cambio en su gabinete. Sin embargo, los acontecimientos que se han producido desde marzo de este año han supuesto la evaporación del capital político y simbólico acumulado por Néstor Kirchner durante sus cuatro años en el poder gracias a su éxito para dirigir la recuperación económica del país. En ese sentido, las dificultades de Fernández parecen indicar la apertura de un nuevo periodo en Argentina, a medida que los modos de gobierno establecidos por su predecesor dan paso a una configuración más inestable. Mucho dependerá de la coyuntura económica general y de cómo pueda responder Fernández a los últimos contratiempos. Pero una evaluación de la herencia del periodo de Kirchner en el gobierno proporciona una base desde la que calibrar las perspectivas a largo plazo del país.

Establecer un balance del kirchnerismo no es una tarea sencilla. Aunque está lejos de ser el restablecimiento de la cultura política argentina que proclaman sus partidarios, tampoco es una mera prolongación de la Administración de la década de 1990. En este artículo esbozaré los rasgos característicos del kirchnerismo, señalando tanto su ruptura con el pasado como sus elementos de profunda continuidad. Si bien Kirchner se puede apuntar algunos auténticos logros económicos y unas ciertas iniciativas políticas que le separan de administraciones anteriores, por otra parte su gobierno fue responsable de una ampliación de las desigualdades sociales y de una creciente tendencia hacia formas de precariedad laboral. Mientras tanto, su praxis política vino marcada por un repetido recurso a tácticas de cooptación y clientelismo, que sugieren que el antiguo orden que supuestamente había quedado desechado tras la crisis de 2001-2002, se aferra a la vida con un aspecto distinto y que realmente puede llegar a recuperarse por completo.

Fuera del abismo

Néstor Kirchner llegó al poder en 2003 en la estela de una profunda crisis económica que había agitado severamente los fundamentos de la sociedad argentina. Gracias a la política de convertibilidad peso-dólar adoptada por Carlos Menem, la caída de Wall Street en 2000 tuvo un efecto inmediato y amplificado en Argentina; aumentó la evasión de capital y el déficit creció, hasta que a finales de 2001 se vislumbra la suspensión del pago de la deuda. La insistencia del presidente De la Rúa en aferrarse a la convertibilidad, y el bloqueo de la retirada de fondos de los depósitos que realiza su Ministerio de Economía, imponiendo el *corralito*, desataron rápidamente las protestas. A finales de diciembre, De la Rúa se veía obligado a escapar en helicóptero de la Casa Rosada, para ser sucedido por cuatro presidentes interinos en el espacio de doce días. Las tareas de abandonar la convertibilidad y de afrontar el pago de la deuda del país, la más alta de toda su historia, quedaron a cargo del gobierno de Eduardo Duhalde, el candidato peronista derrotado en 1999.

La devaluación y la suspensión de pagos provocaron la caída del PIB en un 16 por 100 en el primer trimestre de 2002; el desempleo alcanzó un pico del 23 por 100 y los salarios reales se desplomaron en un 24 por 100. Antes de que acabara el año, los niveles de pobreza habían crecido hasta el 54 por 100 en las *villas miseria* del gran Buenos Aires, y las condiciones eran mucho peores en provincias ya deprimidas como Tucumán, donde el índice de pobreza alcanzaba el 71 por 100². Fue un devastador colapso del que había sido uno de los países más prósperos de América Latina. El descrédito de la clase política llegó hasta el extremo de que el eslogan dominante en las movilizaciones de 2002 era «¡Que se vayan todos!» Argentina se volvió un laboratorio de nuevas formas de acción colectiva, entre las que se encontraban la movilización de los parados en organizaciones de *piqueteros*, asambleas de barrio y tomas de empresas en bancarota; también se produjo una proliferación de los más variados grupos culturales.

Sin embargo, a principios de 2003 la mayoría de estas iniciativas habían perdido fuerza y las esperanzas de reordenar la vida política «desde abajo» dieron paso a las exigencias para regresar al orden. La campaña electoral de Kirchner buscó recoger este mensaje con consignas como «Por un país serio, por un país normal». Kirchner había sido desde 1991 gobernador en Patagonia de la provincia de Santa Cruz y en la década de 1970 miembro de Juventud Peronista, un movimiento juvenil de la izquierda peronista que se había opuesto a la dictadura en las décadas de 1960 y 1970. Una figura poco conocida en el panorama nacional, su ascenso se produce en medio de una importante crisis institucional que había conducido al colapso de gran parte del sistema de partidos en Argentina; prácticamente los únicos supervivientes eran un puñado de grupos minoritarios en la izquierda y un partido peronista drásticamente dividido. En abril de 2003, Kirchner era uno de los tres candidatos peronistas a la presidencia y, gracias a las divisiones internas del Partido Justicialista y a la debilidad de la oposición, acabó segundo en la primera ronda de las votaciones, con el 22 por 100 de los votos. Dos puntos por encima quedó Menem, que, sin embargo, estaba contaminado por su asociación con la política de convertibilidad, las privatizaciones y la corrupción de la década de 1990, y que claramente iba a resultar el perdedor en la segunda ronda. Menem se retiró, entregando por defecto la presidencia a Kirchner.

Se podría haber esperado que un presidente con un respaldo tan débil se viera maniatado por la necesidad de asegurarse el apoyo dentro de un escenario político fragmentado. Sin embargo, los acontecimientos demostraron una vez más la capacidad del peronismo para redefinir el panorama político, obligando a los demás actores a reubicarse en relación con las rupturas aparentes que ha avanzado. Después de promover en la década

² «Las muertes de niños por hambre conmocionan Argentina», *The Guardian*, 25 de noviembre de 2002; Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

de 1990 la política del Consenso de Washington, el Partido Justicialista con Kirchner a la cabeza era capaz de presentarse a sí mismo como una fuerza de centro izquierda opuesta al neoliberalismo. La adopción de una posición crítica respecto al neoliberalismo mediante la apropiación del espíritu de las movilizaciones de 2002 coincidió con una tendencia creciente en toda América Latina hacia gobiernos de centro izquierda; Chávez había sido reelegido en 2000, Lula obtenía la victoria en 2002 y Tabaré Vázquez seguiría en Uruguay en 2004. La retórica antineoliberal de Kirchner, enfocada hacia las empresas privatizadas que estaban en manos de las multinacionales y hacia sectores especiales de la economía (especialmente a los productores agrícolas), coincidía así con un cambio más amplio en el clima ideológico.

También en el reino de la política institucional Kirchner empezó realizando notables rupturas con el pasado que tuvieron un impacto muy positivo sobre la opinión pública. En primer lugar, nombró un nuevo Tribunal Supremo. El anterior estaba estrechamente vinculado con los regímenes de la década de 1990, y su reemplazo por figuras de reconocido prestigio e integridad fue bien recibido³. En segundo lugar, Kirchner adoptó una política completamente nueva hacia los militares, reemplazando a los mandos superiores y condenando inequívocamente las atrocidades cometidas por la dictadura entre 1976 y 1983. Esto le diferenciaba claramente de Alfonsín y Menem, quienes en 1989 habían garantizado el perdón presidencial a aquellos que estaban acusados de crímenes contra la humanidad. Kirchner llegó hasta el extremo de pedir perdón a la sociedad, en nombre del Estado argentino, por dos décadas de impunidad sancionada por gobiernos civiles. Las leyes que impedían el desarrollo de las causas fueron anuladas entre 2003 y 2005, y docenas de miembros de las fuerzas armadas fueron finalmente llevados a juicio⁴.

Clientelismo y cooptación

Pero Kirchner también desarrolló una fuerte tendencia a gobernar por decreto en línea con sus predecesores. Como en otros países de América Latina, las reformas neoliberales en Argentina habían concentrado la autoridad en el gabinete del presidente, acentuando la tradición local de populismo hiperpresidencialista. Por encima de todo, Kirchner reforzó real-

³ Este paso para fortalecer la independencia judicial tuvo un retroceso importante en febrero de 2006 con una ley que aumentaba la representación política y el control del gobierno en el Consejo de la Magistratura, un órgano responsable del nombramiento, control y revocación de los jueces.

⁴ Sin embargo, el proceso sufrió un revés en septiembre de 2006 con la desaparición de Julio López, un antiguo *desaparecido* cuyo testimonio era clave en la causa contra un jefe de la policía que se enfrentaba a una condena de cadena perpetua. La desconocida suerte de López resalta de nuevo los persistentes lazos entre el aparato represivo de la dictadura y las actuales fuerzas de seguridad, y arroja dudas sobre la viabilidad de nuevos juicios.

mente el poder del presidente consolidando el modelo «decisionista» y limitando la discusión política a un reducido grupo de consejeros. Las promesas de una «nueva política» quedaron defraudadas por el fracaso en destituir a gobernadores y otros cargos contaminados por sus actuaciones en la década de 1990, y por la reaparición del viejo estilo del clientelismo, más descarado en la conurbación de Buenos Aires, que alberga a una tercera parte de los 39 millones que forman la población del país y donde el patronazgo político se disparaba en momentos de elecciones. Esto resultó especialmente notable en el Gran Buenos Aires durante la campaña de 2005 a las elecciones de medio mandato al Congreso, marcadas por una continua lucha interna dentro del peronismo entre los que apoyaban a Kirchner y la sección del partido encabezada por el anterior presidente Eduardo Duhalde. Los hogares pobres del desindustrializado cinturón bonaerense fueron colmados de aparatos de uso doméstico y de subsidios, y los cargos locales fueron cortejados en masa por los enfrentados jerarcas del partido.

El auge de las relaciones clientelistas iba acompañado de una masiva introducción de la asistencia social. El gobierno provisional de Duhalde de 2002-2003 había creado el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD), que extendió la cobertura de desempleo, pasando el número de beneficiarios de 700.000 a 2 millones. El valor de estas coberturas, el equivalente a 50 dólares mensuales, cayó evidentemente con el crecimiento de la inflación, pero, a pesar de todo, Kirchner aumentó el número de programas de asistencia, ampliando el abanico de beneficiarios, de modo que en 2007 el total de beneficiarios de una u otra forma de asistencia ascendía a 2,6 millones⁵. El objetivo de todo ello era permitir que el peronismo pudiera recuperar el territorio que había perdido a favor de fuerzas sociales de base, especialmente a favor de los *piqueteros*. Estas organizaciones de desempleados habían aparecido por primera vez en 1996-1997 en los estados productores de petróleo de Neuquén y Salta, así como en las áreas del Gran Buenos Aires más duramente golpeadas por el desempleo. Su actividad principal consistía en la acción directa en forma de piquetes o bloqueos de carreteras, en la organización de comunidades y en el establecimiento de asambleas populares de barrio y a otros niveles. Su número aumentó espectacularmente con la crisis de 2002; al año siguiente se calculaba que había unos treinta grupos *piqueteros*, con alrededor de 150.000 miembros; en la actualidad puede haber unos doscientos, aunque sea difícil de evaluar el impacto preciso de las recientes tendencias hacia la fragmentación⁶.

Los *piqueteros* tuvieron un papel principal en la escena política durante el periodo cumbre de la radicalización del país desde 2000 hasta 2004.

⁵ De acuerdo con cifras del INDEC, había 1.028.770 beneficiarios del PJJHD; 530.000 del Plan de Pensiones; 410.000 del Plan para la Inclusión Social de las Familias; 575.000 del proyecto Manos a la Obra y 32.000 registrados para el Seguro de Captación y Empleo.

⁶ Para un tratamiento más exhaustivo del movimiento de los *piqueteros*, véase Maristella Svampa y Sebastián Pereyra, *Entre la ruta y el barrio. Las experiencias de las organizaciones piqueteras*, Buenos Aires, 2003.

Mientras los gobiernos de De la Rúa y Duhalde habían respondido alternativamente con la negociación y la represión, Kirchner adoptó una estrategia doble, de cooptación y de drásticas medidas judiciales sobre la protesta social. Por una parte, se produjo una auténtica criminalización de los grupos más activos en las confrontaciones callejeras con las autoridades. Por otra, los programas de asistencia como el PJJHD proporcionaron un medio de contener el conflicto social mientras se minaba el proyecto colectivo de los *piqueteros*: los beneficios iban asociados al empleo obligatorio, y estas oportunidades de trabajo se ofrecían de acuerdo con un criterio individual. Las organizaciones *piqueteras* fueron desde el principio profundamente ambivalentes sobre semejantes programas, cuyo carácter no universal reforzaba las connotaciones asistenciales del sistema y ataba a los beneficiarios a la dependencia del Estado. Además, el propio sistema fue descaradamente manipulado por los cargos locales de los distritos más pobres, realizando la distribución en línea con sus objetivos clientelistas.

El propio Kirchner buscaba aislar a los grupos más radicales dirigiendo los recursos hacia aquellos que mostraban una mejor disposición hacia su Administración. Su adopción de un discurso crítico con el neoliberalismo le permitía atraer a un considerable número de líderes *piqueteros* a departamentos del gobierno a cargo de la política social, así como a la propia cancillería. En muchos casos, los designados se encontraron trabajando junto a antiguos cargos menemistas o representantes de un peronismo sin reconstruir, precisamente la gente contra la que anteriormente se suponía que estaban luchando. Diversos colectivos de parados acabaron apoyando la política de Kirchner, renunciando a su independencia y fracasando en aumentar su ámbito de influencia.

Este proceso se vio acompañado entre 2003 y 2005 por una batalla entre los grupos *piqueteros* más militantes y el gobierno, que se desarrolló principalmente en las calles y plazas de la capital. Los grupos *piqueteros* que se habían unido a las autoridades exigían la institucionalización del movimiento y la retirada de las calles, respaldando de hecho un emergente consenso *antipiquetero*. La estigmatización del sector militante por los políticos y los medios de comunicación acabó por abarcar a todo el fenómeno *piquetero*, incluidas aquellas organizaciones que se habían unido al gobierno⁷. El coro de desaprobación pública reveló la ruptura de los lazos de solidaridad formados durante la crisis de 2001-2002 entre las clases trabajadoras y la clase media radicalizada. Estos lazos se vieron reemplazados por una nueva presentación del viejo antagonismo entre la

⁷ De cualquier forma, hay que decir que las organizaciones *piqueteras* contribuyeron a su propio aislamiento y deslegitimación, especialmente los grupos trotskistas que retrataban a Kirchner como una mera continuación de lo anterior y, con ello, no reconocían la capacidad de adaptación del peronismo. Sus llamamientos para continuar la agitación popular finalmente acabaron por subestimar la gran asimetría de fuerzas entre el movimiento y el gobierno, así como la vulnerabilidad de los sectores que buscaban movilizar.

ciudad y la conurbación, entre Buenos Aires y la periferia bonaerense, los cuarteles permanentes de las «clases peligrosas».

Las fronteras de la inseguridad

Paradójicamente, la crisis de 2001-2002 proporcionó al peronismo una oportunidad histórica para tomar el poder después del descrédito de sus oponentes y de reconstituirse a sí mismo a partir de un despliegue de la asistencia social. Esto, a continuación, le permitió sentar las bases para un renovado clientelismo y para incorporar eficazmente al Estado a un abanico de actores sociales de la oposición. También en el frente económico Kirchner pareció apuntarse considerables éxitos, el más notable el pago de los préstamos del FMI, por un valor de 9,5 millardos de dólares en 2005, y la renegociación de gran parte de la deuda restante con acreedores privados. Mientras la deuda exterior en 2002 era del 138 por 100 del PIB, en 2006 había descendido al 59,4⁸. Los principales factores que permitieron todo esto fueron los altos índices de crecimiento económico, que hizo que el PIB aumentase un 9 por 100 anual entre 2003-2007 y se lograra un superávit fiscal de entre el 3 y el 4 por 100 anual. Esto, a su vez, se debía principalmente a la recuperación industrial posterior a la devaluación, que hizo descender el desempleo desde el 17,3 por 100 en 2003 hasta el 8,5 en 2007, así como a los grandes beneficios de la agroindustria en medio de los boyantes precios globales de las materias primas⁹.

Por otra parte, los logros de Kirchner necesitan situarse en su contexto. El hecho de que conservara los servicios del ministro de Economía de Duhalde, Roberto Lavagna, es la señal más evidente de la continuidad con políticas anteriores. Además, los créditos del FMI representaban solamente un 9 por 100 del total de la deuda exterior y, aunque el gobierno obtuvo reducciones en las cantidades restantes, el marco temporal exigido por el pago de la deuda sigue siendo una pesada carga, dejando poco margen para alcanzar en un futuro inmediato un superávit presupuestario elevado. Más importante es que, aunque los indicadores macroeconómicos son positivos, el crecimiento se ha producido de manera desigual; las disparidades económicas y sociales que se abrieron en la década de 1990 y que se ensancharon después del precipitado desplome de la convertibilidad del peso, se han vuelto aún más amplias. De acuerdo con un estudio realizado en 2007, «de cada 100 dólares generados por el crecimiento económico, [desde 2003], 62,5 fueron al 30 por 100 más rico, dejando 37,5 a repartir entre el 70 por 100 restante»; el 40 por 100 más pobre recibió solamente 12,8 dólares¹⁰. En

⁸ Datos procedentes de www.casariosada.gov.ar.

⁹ CEPAL, *Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean*, 2006. Las cifras de desempleo no incluyen a los que están apuntados a programas de asistencia; si se los incluye, la cifra de 2007 es del 9,8 por 100.

¹⁰ Claudio Lozano, Ana Ramerí y Tomas Raffo, *Crecimiento y distribución. Notas sobre el recorrido 2003-2007*, Buenos Aires, Instituto de Estudios y Formación, 2007.

la década de 1990, el 10 por 100 de la población con mayores ingresos ganaba veinte veces más que el 10 por 100 más pobre; en la actualidad, ese porcentaje ha aumentado hasta veintisiete veces más. La pobreza, aunque se ha reducido desde el 47 por 100 de 2003 al 34 por 100 actual, sigue siendo significativamente más elevada que en la década de 1990, cuando permanecía en el 24 por 100, lo que sugiere que la crisis de 2001-2002 propuso un nuevo modelo respecto al que medir la desigualdad¹¹.

Realmente, aunque Kirchner aumentó los servicios sociales, su fracaso para poner en marcha programas globales de redistribución que aboradaran la desigualdad social sirvió de hecho para fortalecer las fronteras de la exclusión. El periodo posterior a 2004 también vino marcado por un incremento continuo de la precariedad laboral, mostrando una continuidad con los gobiernos precedentes. Durante la década de 1990 se había puesto en práctica la «flexibilización» por medio de la Ley Nacional de Empleo (24.013) de 1991, que sancionaba un aumento de la inseguridad tanto en el sector privado como en el público. Utilizando el creciente desempleo como mecanismo disciplinario, el coste del trabajo cayó el 62 por 100 en el curso de la década; las modalidades de contratación se multiplicaron –autoempleo, subcontratación, externalización, contratos temporales– y los índices de empleo informal crecieron desde el 25 por 100 en 1990 al 39 por 100 en 2001¹². El sector industrial y las compañías recientemente privatizadas recibieron el impacto pleno de medidas de racionalización y amenazas de despidos, con el resultado de que la militancia laboral quedó esencialmente confinada al sector público y principalmente a acciones defensivas en la esfera de la salud y la educación. La flexibilización continuó imponiéndose con la revisión en 2000 del código laboral, que meramente confirmaba la asimetría entre capital y trabajo¹³.

Con Kirchner, la dinámica de la precariedad continuó, a pesar de la recuperación económica y de los índices de crecimiento anual del 8-9 por 100. Aquí entraban en juego un cierto número de factores: un aumento del empleo informal, la expansión del sector servicios –por ejemplo, los *call centers*, publicidad y transporte– provocada por la devaluación y la fuerte persistencia de empleos temporales en el sector público. Entre 2003 y 2005, aunque se crearon 2,5 millones de empleos, 1,8 eran empleos informales, el 70 por 100 del total. A mediados de 2007, el trabajo informal

¹¹ C. Lozano, «Comportamiento de los sectores dominantes», documento presentado en una conferencia sobre el Plan Fénix, Buenos Aires, septiembre de 2005, y «La Argentina desigual», *Moreno* 179 (diciembre de 2006).

¹² Datos del INDEC.

¹³ La ley de abril de 2000 se conoce como la «Ley Banelco», en referencia a los cajeros automáticos del mismo nombre; en aquel momento, muchos sospecharon que el gobierno de la Unión Cívica Radical de De la Rúa había sobornado a legisladores peronistas para que votaran a favor del proyecto, un hecho que se confirmaría más tarde. La ley fue revocada en 2004.

representaba el 43 por 100 del empleo total¹⁴. Esto evidentemente incluye el último eslabón en la cadena de la inseguridad laboral, el trabajo «esclavo» que se produce en la construcción y las industrias textiles y que se ceba de un modo característico sobre los emigrantes de países vecinos; en 2006 se calculaba que solamente en la capital alrededor de 4.000 bolivianos estaban empleados en los talleres de trabajo esclavo¹⁵.

Peces gordos y militantes

La conflictividad laboral de los últimos años se ha centrado principalmente en el tema salarial, más que en problemas derivados de los contratos o de la representación sindical. En parte, eso se debe al crecimiento económico y a la creciente inflación, cuyos datos oficiales están muy por debajo de la realidad, debido a las interferencias manipuladoras del gobierno en el Instituto Nacional de Estadística¹⁶. Los esfuerzos de reestructuración salarial empezaron en 2005 con un proceso en el que el sector privado formal ha sido el más beneficiado, aunque incluso aquí los aumentos salariales no recuperaron el poder adquisitivo anterior a la crisis. El mismo año también asistió al mayor número de conflictos laborales (824) desde las reformas neoliberales de 1990, más que triplicando el total de 2004¹⁷.

Una influencia significativa también ha sido la estrecha relación que se ha desarrollado entre el gobierno y la Confederación General de Trabajadores (CGT), el sindicato oficialista popularmente conocido como los «gordos», los peces gordos. Dirigido desde 2003 por Hugo Moyano, la CGT era capaz de combinar su inclinación hacia los empresarios con una cierta capacidad para presionar al gobierno. Las relaciones de la Casa Rosada con la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que había desempeñado un papel opositor en la década de 1990, eran más ambiguas. A pesar del apoyo que le prestaron varios de sus líderes, en abril de 2005 Kirchner no quiso garantizarle un estatus representativo en la ronda de negociación salarial, dejándola como monopolio de la CGT. En la actualidad, la CTA se encuentra internamente dividida debido al apoyo de muchos de sus líderes a la política del gobierno; desde entonces ha entrado en declive¹⁸.

¹⁴ C. Lozano *et al.*, «Clandestinidad y precarización laboral en la Argentina de 2006», Instituto de Estudios y Formación, 2006; *Clarín*, 14 de junio de 2007, citando datos del INDEC.

¹⁵ En marzo de 2006, un incendio en un taller ilegal en la zona del puerto de Buenos Aires mató a seis emigrantes bolivianos, la mayor parte menores de edad, provocando una campaña en contra de estos talleres. *La Nación*, 24 de junio de 2006.

¹⁶ La tasa oficial para 2007 se situaba entre el 7 y el 8 por 100, mientras que la mayoría de los análisis la fijaban entre el 18 y el 20 por 100; en junio de 2008, la tasa de inflación anual oficial era de un 9,3 por 100, pero otros cálculos la situaban en un 25 por 100.

¹⁷ Datos del Centro de Estudios Nueva Mayoría. Aunque las cifras cayeron hasta 501 en 2006, en marzo de 2008 aumentaban hasta 638.

¹⁸ Mientras tanto, la CGT se ha dividido en la estela de las protestas agrícolas de 2008: Hugo Moyano apoyando al gobierno y una facción «disidente», encabezada por Luis Barrionuevo,

Quedan, sin embargo, fragmentos de militancia sindical autónoma, entre los que destaca especialmente el Movimiento Intersindical Clasista, formado en diciembre de 2005 a partir de comités independientes de trabajadores del ferrocarril y del metro, del sector público y sanitario entre otros. Este movimiento surgió a partir del éxito de la huelga de los trabajadores del metro, que en febrero de 2005 obtuvieron un aumento del 44 por 100. Además, deberíamos señalar que en Argentina todavía hay un gran número de fábricas bajo gestión de los trabajadores, alrededor de 170, que dan empleo a unas 12.000 personas. La mayoría de estas empresas están en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal, con 113 y 29 empresas en cada una de estas áreas¹⁹. Pero solamente en un puñado de casos se han producido expropiaciones permanentes; el resto son temporales, efectuadas por legislaciones locales o provinciales. El gobierno de Kirchner «nunca elevó las tomas de fábricas al estatus de política oficial [...] La falta de una política nacional de expropiaciones fue precisamente lo que dejaba a las empresas gestionadas por los trabajadores al capricho de los gobiernos locales [y] a la discreción de los jueces»²⁰. De hecho, varias fábricas «recuperadas» volverán a sus dueños una vez que finalice el periodo de expropiación, como es el caso de la más conocida de ellas, la antigua Zanón en el norte de Patagonia, actualmente conocida como la cooperativa FASINPAT (Fábrica Sin Patrón). Además, igual que los grupos *piqueteros*, algunas de las mayores fábricas «recuperadas» han entrado en una fase de institucionalización.

Modelos económicos

La Administración de Kirchner empezó realizando ajustes parciales en la economía del país, promoviendo la resurrección de la industria. Como resultado, la producción industrial creció un 11 por 100 de media durante el periodo 2003-2006, dirigida hacia el mercado nacional, aunque la exportación de coches a Brasil también aumentara significativamente. En consonancia con su retórica antineoliberal, Kirchner también organizó ataques contra determinadas compañías privatizadas. Los servicios públicos que se habían vendido en la década de 1990 fueron, en ocasiones, llamados a rendir cuentas por su falta de cumplimiento de los términos del acuerdo y, en algunos casos, vueltos a nacionalizar, como, por ejemplo, la compañía de distribución y tratamiento del agua, anteriormente en manos de la multinacional francesa Suez, el servicio de correos y el ferrocarril de San Martín. Pero más allá de estas medidas progresistas, la realidad era la de un considerable apoyo al sector privado. La principal medida adoptada para contrarrestar los crecientes costes de la energía y

despedido por Menem de la Administración de Trabajo Social por declarar que «ningún argentino se hace rico trabajando», respaldando las demandas de los agricultores.

¹⁹ Según datos de 2007 del Ministerio de Trabajo.

²⁰ Julián Rebón, *La empresa de la autonomía. Trabajadores recuperando la producción*, Buenos Aires, 2007.

evitar los aumentos de precios fue apuntalar a las compañías privatizadas con grandes subsidios. En los primeros nueve meses de 2007, estos subsidios alcanzaron los 10.470 millones de pesos, unos 40 millones de pesos, el equivalente a 15 millones de dólares, diarios²¹.

El principal pilar de la estrategia económica de Kirchner fue la consolidación y expansión de un modelo extractivo dirigido a la exportación, centrado en la industria agropecuaria, la minería y los sectores energéticos, un «neodesarrollismo» que ilustra perfectamente la división del trabajo en el capitalismo contemporáneo y la creciente grieta entre los países ricos y el Sur global. Con ello, una vez más su política supone una continuidad con la de sus predecesores. La minería a cielo abierto, los proyectos de presas gigantescas y la extensión del monocultivo han dado paso a una nueva cartografía de la resistencia, y se han formado incontables asambleas ciudadanas, especialmente en la franja montañosa de los Andes, para protestar por el daño que se causa al medio ambiente. El instrumento preferido ha sido el bloqueo de carreteras, que, anteriormente al conflicto por el impuesto agrícola de 2008, se había llevado a la práctica especialmente por grupos locales y sindicatos²². El gobierno ha ignorado ampliamente semejantes actuaciones, con la única excepción de los bloqueos realizados a partir de 2005 en Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos en la frontera con Uruguay, para evitar la creación de una fábrica de celulosa. Pero la intervención de Kirchner al lado de la protesta no evitó el comienzo de la actividad de la empresa en 2008 y desvió el debate hacia el terreno patrioter, enfrentando a Argentina con su vecino más pequeño, en vez de promover una discusión de modelos alternativos de desarrollo.

El componente agrícola del modelo de exportación argentino ha sido la fuente de importantes tensiones en los últimos meses. Desde finales de la década de 1990, se ha ido introduciendo en el país un nuevo modelo agrario, basado en la siembra directa de semillas genéticamente modificadas. Su éxito ha convertido a Argentina en uno de los principales exportadores mundiales de cosechas transgénicas. Esta nueva forma de agricultura, que se extiende no solamente por toda la Pampa sino también por las áreas anteriormente marginadas del norte y de la costa, ocupa actualmente un total de 18 millones de hectáreas, el 90 por 100 de ellas dedicadas al cultivo de soja. La rentabilidad de la agricultura se vio estimulada por la devaluación y el alza de los precios de las materias primas a escala mundial; pero la expansión del nuevo modelo también es una consecuencia de su habilidad para incorporar un abanico de actores económicos. La cadena de producción implica no sólo a multinacionales como

²¹ *La Nación*, 1 de febrero de 2008.

²² De los 593 bloqueos de carreteras registrados en 2007, el 52 por 100 fueron consecuencia de actuaciones locales, de estudiantes y minoristas; los sindicatos fueron responsables del 23 por 100; las organizaciones *piqueteras* representaron solamente el 3 por 100, lo que muestra el alcance de su declive. Los datos proceden del Centro de Estudios Nueva Mayoría.

Monsanto y Cargill, sino también a proveedores de equipos, empresas que gestionan fondos de semillas y, por supuesto, a pequeños y medianos propietarios, muchos de los cuales se han convertido en rentistas alquilando sus tierras para el cultivo de soja.

El rápido desarrollo del nuevo modelo supuso, sin embargo, la superación completa de los sistemas agrícolas existentes, provocando una crisis en el campo. Entre 1988 y 2002 desaparecieron un total de 103.405 granjas, mientras que en los últimos veinte años el área media de las grandes empresas aumentó de 243 a 538 hectáreas. Las técnicas de plantación directas han reducido la demanda de mano de obra agrícola entre un 28 y un 37 por 100, provocando un éxodo masivo de la población rural. Realmente, a pesar de la explosión agraria, Argentina emplea en la agricultura a muchos menos trabajadores que otros países de América Latina, el 0,8 por 100 del empleo total en comparación con el 18,6 de Brasil o el 31,1 por 100 de Paraguay, países que, de la misma manera, han invertido principalmente en el cultivo de soja²³. La marea de beneficios ha acentuado la tendencia hacia el monocultivo, ha acelerado la deforestación y ha fomentado el uso indiscriminado de herbicidas, añadiendo las preocupaciones medioambientales a la pérdida de la seguridad alimentaria y de la independencia tecnológica ocasionadas por su dependencia de las exportaciones de materias primas y productos básicos.

La herencia de la presidenta

El gobierno de Kirchner se define por un persistente dualismo. Por una parte, la retórica antineoliberal y los ataques a las compañías privatizadas; por otra, grandes subsidios al sector privado y la expansión del trabajo precario e informal. A pesar de un incremento del gasto social, el gobierno hizo poco por contrarrestar el aumento de la desigualdad de ingresos y, mientras prometía una «nueva política», volvía a asumir las formas tradicionales peronistas de cooptación y clientelismo. En términos institucionales, los gestos progresistas sobre derechos humanos y el Tribunal Supremo servían de contrapeso al refuerzo del hiperpresidencialismo y a la aprobación, bajo presión estadounidense, de la legislación «antiterrorista» en junio de 2007; una legislación que, en ausencia de un conflicto armado, podía potencialmente servir como un instrumento más para criminalizar la protesta popular.

Este doble discurso ha dado paso al cogobierno conyugal. La decisión de Kirchner en julio de 2007 de no presentarse a la reelección tomó a todo el mundo por sorpresa, y todavía más la nominación de su mujer como

²³ Pierre Salama, «Argentine: le choc de la hausse des matières premières», manuscrito, julio de 2008; Grupo de Estudios Rurales, «17 de Abril: Día Internacional de la Lucha Campesina», *Realidad Económica* (2004), p. 112; CEPAL, *Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean*, 2007.

candidata a su sucesión. Cristina Fernández de ninguna manera era una recién llegada; había sido legisladora provincial en Santa Cruz, después pasó a ser uno de sus representantes en el Congreso antes de ser senadora en 2001; en 2005 fue elegida senadora por Buenos Aires. Con su marido había sido miembro del movimiento juvenil peronista en la década de 1970; y fue en la de 1990 cuando adquirió reputación a escala nacional, siendo de hecho más conocida que él. Para la opinión pública, el carácter nepotista de su ascenso al poder (hay que tener en cuenta que en ninguno de los partidos se produjeron elecciones primarias) quedaba mitigado por el hecho de que estaba ampliamente considerada y aceptada como una figura de prestigio nacional.

La aproximación de las elecciones generales y la división del partido peronista entre los que apoyaban a la presidenta y las facciones alrededor de Duhalde, llevaron a la pareja Kirchner a sellar una alianza con elementos de la Unión Cívica Radical. Fundada en 1891, la UCR es el partido político más antiguo de Argentina y el principal competidor histórico del peronismo, orientado principalmente a las clases medias urbanas. En 1999, el descontento con el *menemismo* les proporcionó la presidencia en la figura de De la Rúa, pero en 2001 encallaron en las arenas de la crisis de la convertibilidad, que provocó el colapso virtual del partido en medio de una crisis más amplia de representación política. Varios de sus líderes abandonaron la formación para crear nuevos partidos y, en 2003, el candidato de la UCR a la presidencia alcanzó un mísero 2,3 por 100, debido a los votos que se llevó, por la izquierda, la antigua diputada de la UCR Elisa Carrió y, por la derecha, el antiguo ministro de De la Rúa, Ricardo López Murphy. En las elecciones presidenciales de 2007, la UCR respaldó a Roberto Lavagna, apoyando por primera vez en su historia a un candidato que no era del partido. Lavagna quedó en tercera posición con el 17 por 100 de los votos, detrás de Carrió, que alcanzó el 23 por 100 con un discurso visiblemente más conservador que antes. Aunque la presencia de la UCR en el Parlamento se vio reducida a un total de 40 senadores y congresistas, continúa siendo la segunda fuerza parlamentaria.

Con la UCR, como con otros, los Kirchner buscaban cooptar a aquellos que se mostraban favorables hacia la política del gobierno, conocidos como los «radicales K», cuya figura más destacada era Julio Cobos, que se unió a Fernández en calidad de candidato a la vicepresidencia. Los dos aparecieron como los representantes del Frente para la Victoria, la flexible alianza que había llevado al poder a Kirchner en 2003 y cuya composición variaba de distrito en distrito, sumando disidentes radicales, socialistas, comunistas o cristianodemócratas a un núcleo de seguidores de Kirchner. La campaña electoral de 2007 fue una de las más apáticas de la historia de Argentina; la participación del 72 por 100 en octubre fue la más baja en unas elecciones presidenciales desde la recuperación del gobierno democrático en 1983, todavía más llamativa a la vista del hecho de que, bajo la ley argentina, los no votantes pueden ser multados. El 45 por 100 de los votos que obtuvo Fernández en gran parte eran tanto producto de la

lealtad del partido como el capital político creado por la labor de su marido. También hubo una marcada correlación entre los niveles de ingresos y los votos por el partido correspondiente; la candidatura peronista arrasaba en los distritos más deprimidos, pero se desenvolvía peor en áreas relativamente prósperas, como las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. A pesar de la explosión del consumo, las clases medias urbanas parecen haber dado la espalda al kirchnerismo.

Otoño de descontento

Este diagnóstico se confirmaba a principios de 2008, cuando en marzo surgen las protestas provocadas por la subida de los impuestos agrícolas. La medida, que elevaba un 44 por 100 tasas que anteriormente variaban en consonancia con los precios internacionales, no hacía distinciones entre pequeños y grandes productores y fue imperiosamente establecida por un decreto presidencial. La arrogancia era un componente típico del *modus operandi* de Kirchner, pero en este caso dio lugar a un agresivo enfrentamiento entre el gobierno y un abanico de organizaciones, uniendo a los agricultores con las clases medias urbanas. Aunque las protestas se manifestaban como cuestiones de clase y raza, incluyendo el rechazo visceral de la clase media hacia el peronismo, tradicionalmente asociado con los estratos más bajos, también expresaban la preocupación por la concentración de poder político en la pareja presidencial y en un pequeño círculo de asociados. En realidad, la rápida escalada del conflicto puso de relieve la falta de flexibilidad del gobierno, y ese proceso socavó la autoridad de la presidenta.

La figura de Ernesto Kirchner reapareció en primer plano, añadiendo la sensación de un poder dual en el vértice político del país. Los portavoces gubernamentales interpretaban la disputa agrícola como ejemplo de una supuesta polarización entre la derecha oligárquica y una Administración nacionalista-popular. En realidad, demostrando una vez más su habilidad para un doble discurso, mientras verbalmente las atacaba, Kirchner había adoptado medidas que favorecían a las corporaciones agrícolas a las que la Casa Rosada estaba criticando ahora. La legislación que permitía a los suministradores de semillas negociar acuerdos favorables sobre contratos e *inputs* se mantuvo firmemente en vigor; en 2003, Kirchner entregó a compañías privadas concesiones para explotar los 7.500 kilómetros de las principales vías de transporte, embolsándose los peajes sin contribuir con la más mínima inversión²⁴. A medida que aumentaban las tensiones en los primeros meses de este año, Fernández, sin embargo, apelaba al populismo, subrayando la importancia de los impuestos agrícolas para la

²⁴ Claudio Katz, «El agrocapitalismo de la soja», Argenpress.info, julio de 2008. En junio, en medio de la crisis, Fernández adelantó un proyecto revisado de concesiones, que expiraban en octubre.

implementación de una posible política redistributiva y para intentar mantener bajos los precios del mercado interior.

Fue solamente la intervención del Tribunal Supremo, que en junio anunciaba que examinaría si el aumento de los impuestos agrícolas era constitucional, lo que llevó a Fernández a enviar un proyecto de ley al Congreso a principios de julio. El estrecho margen con que se aprobó en la Cámara baja, 129 votos a favor y 122 en contra, con 18 partidarios del gobierno votando en contra, debería haber sido un aviso más que suficiente de lo que se avecinaba en el Senado: una derrota del gobierno a manos de su propio vicepresidente. En consecuencia, la presidenta fue obligada a retirar su plan fiscal original, dejando el tipo impositivo en el 35 por 100. Después de la desertión de diversos peronistas y «radicales K», Fernández no podía seguir contando con la mayoría en el Congreso. Tambaleándose con estos golpes, se deshizo del ministro de Agricultura y, más significativamente, aceptó la dimisión de su jefe de gabinete y estrecho aliado Alberto Fernández (que no tiene ninguna relación familiar con ella). En un nuevo intento de alcanzar un acuerdo de cambio, la presidenta dio una conferencia de prensa el 2 de agosto; su marido no había dado ni una. Más allá de estas operaciones de cosmética, queda por ver si el gobierno realizará algún cambio sustancial en su política.

El conflicto con el campo tuvo un resultado paradójico: por una parte, trajo al primer plano del escenario político a unos actores sociales y económicos diferentes vinculados al modelo industrial agrario, al mismo tiempo que fortalecía la posición de los sectores más conservadores y reaccionarios. Por otra, su desenlace ha impuesto unos límites políticos al gobierno que probablemente señalen el fin de la «era K», por lo menos en la configuración en que se ha producido desde 2003, combinando las apelaciones a una «nueva política» y las esperanzas de construir un partido de centro izquierda con una gran concentración de poder en su rama ejecutiva y la utilización instrumental de aliados, incluso dentro del bloque dirigente. Este estilo de gobernar, eficaz para redefinir el escenario político durante los primeros años del mandato de Kirchner, está ahora cuestionado por una parte significativa de la sociedad, sobre todo por las clases medias, que rechazan el autoritarismo de la pareja presidencial, no creen en promesas de renovación y exigen una democratización del poder.

Éstos son los tres principales desafíos a los que se enfrenta Fernández en la actualidad: restablecer la autoridad presidencial que se ha tambaleado tras las protestas agrícolas y la posterior derrota legislativa; forjar para sí misma una identidad política propia, que no tenga que soportar la omnipresencia de su marido y predecesor, y, en la esfera económica, desarrollar una política efectiva de control de precios para contrarrestar la inflación, una tarea que seguramente se complicará más con la próxima ronda de negociaciones con los sindicatos a principios de 2009. A largo plazo, también necesitará una base política más efectiva que el Frente para la Victoria. La elección de Néstor Kirchner como presidente del partido pe-

ronista en mayo de 2008 puede ser un elemento crucial de ello: no sólo como medio de dar al ex presidente un papel público oficial, sino como un primer paso hacia la reconsolidación del Partido Justicialista, que, gracias a las cambiantes estrategias de Kirchner, ha capeado las tormentas de la devaluación con más éxito que ninguna otra fuerza política. La situación, tal como se presenta, parece marcar el fin de la «era K» y de sus tímidos experimentos para construir una coalición de centro izquierda, allanando el camino para que el sistema de dominación tradicional peronista regrese vigorosamente fortalecido.